

La violencia filio-parental es un problema social que debería ser abordado desde distintos niveles de análisis (Harbin y Madden, 1979). Para ello, debería afrontarse no solo en términos individuales o interpersonales, ya que permea la esfera de lo intergrupalo y de lo comunitario. La investigación ha puesto de manifiesto que las variables individuales e interpersonales son insuficientes para explicar por qué los hijos agreden a sus padres (Del-Hoyo et al., 2020). Concretamente, la afirmación aceptada socialmente, y por muchos profesionales de los servicios sociales, de que la violencia filio-parental es el resultado de una disciplina parental inadecuada carece de respaldo científico (Suárez-Relinque et al., 2019). A pesar de ello, esta creencia está teniendo un efecto perverso tanto en los agresores como en las víctimas, provocando una doble victimización de las madres y evitando que los hijos asuman su responsabilidad por el daño causado (Holt, 2016). Como resultado, las intervenciones habituales son terapias familiares genéricas que obvian el contexto sociocultural en el que se produce (McCloud, 2021). Los retos de la investigación actual son delimitar qué factores de riesgo contribuyen, no solo a su génesis de cara a la prevención, sino también qué factores, susceptibles de ser modificados, son cruciales en la intervención en situaciones de crisis y posteriormente. Para concretar las características de los programas de prevención necesitamos estudios longitudinales que nos permitan indagar en el origen de esta violencia y en el desarrollo de su inevitable escalada posterior. Los estudios transversales, más que indicarnos cuáles son las causas del problema, nos permiten ajustar los programas a las características que tienen, en el momento de la intervención, los agresores, sus víctimas y la familia de la que forman parte. De estas características, algunas se dibujan de forma consistente como factores criminógenos dinámicos y han de ser la prioridad de las intervenciones basadas en evidencia (Gallego et al., 2019). Las instituciones sociales, que declaran públicamente su preocupación por el problema, no aportan los recursos necesarios para el diseño e implementación de programas basados en evidencia, ni para la formación rigurosa de los profesionales que han de aplicarlos. El objetivo de esta mesa de expertos es poner de manifiesto cuáles son los retos que, en las actuales circunstancias, tiene la intervención con violencia ascendente.